

**REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL**



JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI

Referencia ACCIÓN DE TUTELA
Accionante MARÍA TERESA RIVERA DE CORREA
Accionado COLPENSIONES y PROTECCION S.A.
Radicación 76001-31-03-002-2024-00198-00

SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA No. 121

Santiago de Cali, quince (15) de octubre del año dos mil veinticuatro (2024)

ASUNTO:

Decide el despacho la acción de tutela interpuesta por la señora MARÍA TERESA RIVERA DE CORREA mediante apoderado judicial, contra COLPENSIONES y PROTECCION S.A., por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al MINIMO VITAL, A LA PENSION, A LA SALUD Y A UNA VIDA DIGNA EN CONDICION DE PERSONA DE LA TERCERA EDAD Y EN ESTADO DE VIUDEZ.

I. ANTECEDENTES:

1. HECHOS

En síntesis, manifiesta la accionante que en calidad de conyugue sobreviviente del señor JAVIER CORREA OSPINA, tiene a su favor sentencia judicial del Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, la cual fue confirmada y modificada por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante Sentencia No. 049 del 19 de febrero de 2021, en la que se ordenó el traslado del señor JAVIER CORREA OSPINA de la AFP PROTECCION a COLPENSIONES con ocasión de la Nulidad de su afiliación a ese fondo, y condenó a la AFP PROTECCIÓN al traslado del dinero constituido en bonos así como los valores de cuotas de administración desconociéndose el trámite actual, que el 12 de abril del año en curso se radicó ante PROTECCION los documentos que acreditan su calidad CONYUGUE SOBREVIVIENTE, y el 28 de junio de 2024 ante COLPENSIONES a fin de radicar las Sentencias referidas para adquirir el derecho que estaba en cabeza de su difunto esposo, señala que, las accionadas no ha proferido acto administrativo que la incluya en nómina de pensionados.

2. OBJETO DE LA TUTELA.

Con el presente amparo constitucional, la parte accionante pretende:

- Proteger los derechos fundamentales reclamados.
- Ordenar a las accionadas dar respuesta mediante el acto administrativo que concede la pensión de sobrevivencia con su respectivo retroactivo.

3. ACTUACIÓN PROCESAL

Avocado el conocimiento de la presente acción de tutela por parte de este Despacho Judicial, se dispuso la notificación a las accionadas para que se pronunciaran frente a los hechos, e igualmente se vinculó a SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A., conforme lo ordenó la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante auto de 26 de septiembre de 2024.

CONTESTACIÓN DE PROTECCION.

Informa que las ordenes impuestas a esa Administradora fueron cumplidas, pues se efectuó el pago de las costas con la constitución del título de depósito judicial, los gastos de administración fueron pagados a Colpensiones, y las primas de seguros previsionales fueron pagados a la aseguradora, ninguna de las ordenes fueron supeditadas entre sí, por lo que desde el momento en el que quedó en firme la sentencia, el señor Javier Correa Ospina se consideró como pensionado en Colpensiones, la sentencia de segunda instancia ordenó de forma expresa que desde el momento de la ejecutoria, Colpensiones debía pagar de forma completa la pensión de vejez. Lo anterior sin perjuicio del trámite administrativo que se deben adelantar entre Protección como AFP SURAMERICANA como aseguradora en la renta vitalicia, y Colpensiones como entidad que debía pagar la pensión de vejez al señor Javier Correa Ospina.

Por lo anterior, reitera que, desde el momento de la ejecutoria, Colpensiones debía pagar al señor Javier Correa Ospina la pensión de vejez y, en consecuencia, considerarlo como su afiliado pensionado, por lo tanto, la solicitud pensional que está elevando la señora MARÍA TERESA RIVERA DE CORREA como supuesta cónyuge del señor Javier Correa Ospina la debe dirigir ante Colpensiones.

Frente al derecho de petición, manifiesta que el día 8 de agosto del 2024 mediante comunicado adjunto, Protección S.A. remitió respuesta de fondo en el caso, clara, detallada, precisa, punto por punto frente a lo pedido y que se envió a la dirección electrónica que la accionante.

CONTESTACIÓN DE COLPENSIONES.

Señala que si bien es cierto la existencia de proceso ordinario que reconoció el derecho al causante, no se evidencia solicitud por parte de la accionante de solicitud de estudio de Pensión de Sobreviviente.

Que una vez revisados los argumentos que dieron origen a la acción de tutela de la referencia, se evidencia que la inconformidad objeto de la acción constitucional radica en el reconocimiento de pensión de sobreviviente, no obstante, verificados los sistemas de información que tiene Colpensiones, se puede observar que no se encuentra petición reciente presentada por la accionante ante esta entidad que se encuentre pendiente de respuesta, hecho que se confirma con el traslado de tutela y anexos donde se evidencia que la accionante no aporta siquiera prueba sumaria en la que se evidencie que en ejercicio de la petición hubiese puesto en marcha la administración, de lo que se entiende un uso indebido de la acción constitucional por cuanto alega la vulneración a derechos fundamentales y esta entidad tiene conocimiento solo a partir de la notificación de la acción.

Adicionalmente indicó que, mediante oficio de 27 de septiembre de 2024, la Dirección de Afiliaciones, efectuó los procesos tendientes a restaurar la afiliación del señor JAVIER CORREA OSPINA, afiliación a favor de Colpensiones, no obstante, a la fecha la Administradora de Pensiones Protección, no ha efectuado el cumplimiento al fallo judicial, y el correspondiente traslado de aportes, no se ha efectuado. Por lo que el Fondo de Pensiones Protección debe tramitar la desmarcación en La Base de Datos SIAFP (solicitada con antelación por la Dirección de Afiliaciones); para que de esta forma Colpensiones pueda dar continuidad al Cumplimiento íntegro del Fallo.

Manifiesta que no es posible por vía de tutela ordenar el cumplimiento o ejecución de sentencia judicial, como quiera que la interesada cuenta con unos mecanismos idóneos para obtener su cumplimiento por la vía coercitiva, tal y como lo dispone el Código General del Proceso, Código Procesal de Trabajo y Seguridad Social o el

CPACA, según fuere el caso, sin que en el presente asunto se acredite, además, que la accionante agotó alguna de estas vías antes de acudir a la acción de tutela.

Seguidamente la accionada se orienta a argumentar las razones por las cuales la presente acción de tutela es improcedente para el cumplimiento de sentencias judiciales conforme a jurisprudencia que invoca, y a detallar el trámite interno para acatar las órdenes judiciales en la materia, a manera de justificar el término que se debe utilizar para que el cumplimiento sea prudencial respecto de las gestiones que se deben adelantar. Finalmente, solicita se declare improcedente la presente acción de tutela.

CONTESTACION DE SURAMERICADA DE VIDA S.A.

Por su parte la aseguradora manifestó que, aunque no le consta si la AFP PROTECCIÓN ha efectuado o no el traslado del dinero que fue ordenado retornar a COLPENSIONES, precisa que SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A. realizó dos (2) pagos a favor de la AFP PROTECCIÓN S.A., pues al ser esta la administradora de fondos de pensiones del RAIS, recaía en ella la obligación y gestión efectuar la devolución a las entidades administradoras del RPM (Colpensiones y OBP), dichos pagos correspondieron a, (i) \$218.356.496, de la reserva de capital con la que contaba la compañía para efectuar el pago de la pensión de vejez que se encontraba disfrutando el señor CORREA, y (ii) \$149.746.805 por la indexación del bono pensional ordena en sentencia. Situación esta con la que SURAMERICANA quedó a paz y salvo de toda obligación que pretenda hacerse valer

Resalta que, de conformidad con el fallo proferido por el Tribunal Superior de Cali – Sala Laboral, en el proceso ordinario bajo radicado No. 76001310500720180053200, mismo que se encuentra en firme, la única entidad responsable del reconocimiento y pago de la pensión reclamada, es la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, pues es allí donde se ordenó el traslado de régimen del señor JAVIER CORREA OSPINA (Q.E.P.D.), entidad a la que fueron trasladados los aportes tal como se ordenó en el fallo indicado.

II. CONSIDERACIONES DEL JUEZ DE TUTELA:

1. PROBLEMA JURÍDICO

Se contrae a establecer, si se vulnera los derechos fundamentales alegados por la parte accionante, en torno a la tardanza por parte de las accionadas en dar cumplimiento a la sentencia judicial que conllevaría al reconocimiento de pensión de sobreviviente a su favor.

2. RESPUESTA AL PROBLEMA JURÍDICO

La respuesta es positiva respecto a la pretensión de ordenar el cumplimiento de la Sentencia Judicial, en virtud de que se observa que ha transcurrido un tiempo más que suficiente sin que la accionada COLPENSIONES se haya pronunciado de fondo frente a la petición de la accionante, conforme al trámite iniciado por el señor JAVIER CORREA OSPINA (q.e.p.d.).

Para despejar el interrogante planteado, es necesario acudir a lo dispuesto jurisprudencialmente sobre los siguientes ítems: i) Procedencia de la Acción de Tutela, ii) Derecho de petición, y iii) Las reglas para la procedencia excepcional de la acción de tutela para el cumplimiento de sentencias que reconozcan derechos pensionales.

i.- PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA.

Debe tenerse en cuenta que la acción de tutela es un mecanismo sumario y preferente creado para la protección de los derechos fundamentales, que se caracteriza por tener un carácter residual o supletorio, obedeciendo a la necesidad de preservar las competencias atribuidas por el legislador a las diferentes autoridades judiciales a partir de los procedimientos ordinarios o especiales, en los que también se protegen derechos de naturaleza constitucional.

Es así como debe entenderse que la tutela no puede convertirse en un mecanismo alternativo, sustitutivo, paralelo o complementario de los diversos procedimientos judiciales, salvo que dichas vías sean ineficaces, inexistentes o se configure un perjuicio irremediable. En relación con este último, La Corte Constitucional ha determinado que se configura un perjuicio irremediable cuando existe el riesgo de que un bien de alta significación objetiva protegido por el orden jurídico o un derecho constitucional fundamental sufra un menoscabo. En ese sentido, el riesgo de daño debe ser inminente, grave y debe requerir medidas urgentes e impostergables. De tal manera que la gravedad de los hechos exige la inmediatez de la medida de protección.

ii.- DERECHO DE PETICIÓN.

De conformidad con los pronunciamientos de la Corte Constitucional, se itera que el derecho de petición se constituye como un mandato superior consagrado en el art. 23 CP. De igual manera se ha determinado el alcance normativo de este derecho fundamental, expresando que su garantía conlleva el que la respuesta a un derecho de petición interpuesto ante autoridad pública o privada (i) debe ser pronta y oportuna, (ii) puede ser favorable o no al peticionario, (iii) debe resolver de fondo lo solicitado de manera a) clara, b) precisa y c) congruente con lo solicitado; y (iv) que debe ser dada a conocer al ciudadano que ha solicitado el derecho.

Así mismo se ha indicado, que se trata de un derecho fundamental que garantiza la protección de otros derechos como el de información, participación política y libertad de expresión, y que adicionalmente cuando este derecho es interpuesto ante una autoridad equivocada, a la misma no se le exime de dar respuesta al mismo. Aunado a lo anterior, se afirma que el derecho de petición no tiene otro medio de defensa que la acción de tutela que se encuentra consagrada en el art. 86 de la Constitución Política, razón por la cual es ese el medio más idóneo, adecuado y eficaz para la protección de este derecho.

La naturaleza fundamental que el ordenamiento jurídico le otorga al derecho de petición, emerge de su consagración en el artículo 23 de la Constitución Política, donde se encuentra establecido como la posibilidad que tiene toda persona de presentar peticiones respetuosas ante las autoridades por motivos de interés general o particular, y de obtener una respuesta pronta.

Siendo de rango fundamental, las autoridades públicas en todos los eventos, y los particulares en los casos que el legislador determine, están en la obligación perentoria de resolver de fondo las inquietudes que se le planteen por parte de cualquier persona, sin que pueda ser objeto de limitaciones o restricciones en lo que atañe a su contenido esencial, más allá de los requisitos y términos de respuesta que regula el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- y otras normas de rango legal que desarrollan su ejercicio.

Bajo estos preceptos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional¹ se ha encargado de fijar el alcance y sentido del derecho de petición, a la par que ha establecido los presupuestos mínimos que configuran el ámbito de su protección constitucional; así,

“a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa.

b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión.

c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. ser puesta en conocimiento del peticionario.

d) La respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita.

e) Este derecho, se aplica a entidades estatales. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine.

f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente.

g). En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación.

h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto.

i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta.²

iii.- LAS REGLAS PARA LA PROCEDENCIA EXCEPCIONAL DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA EL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS QUE RECONOZCAN DERECHOS PENSIONALES.

“En reiteradas oportunidades, esta Corporación ha expresado que la acción de amparo no es un mecanismo de defensa alternativo al procedimiento ordinario dispuesto para lograr el cumplimiento de providencias judiciales, que ordenen el pago de sumas de dinero, pues para el efecto está previsto el proceso ejecutivo.

Sin embargo, ello no implica que el juez constitucional deba rechazar de plano o declarar improcedente el amparo sin efectuar un análisis mínimo del caso, como quiera que la eficacia normativa de los derechos fundamentales de las personas de tercera edad, exige que los funcionarios judiciales valoren el estado de vulnerabilidad en el que se encuentra el accionante y si está en condiciones de enfrentar un trámite judicial adicional para obtener que le sea pagada una obligación ya reconocida.

Así, la Corte Constitucional estableció unas reglas para constatar la procedencia de la acción de tutela para ordenar el cumplimiento de sentencias

que impongan obligaciones de dar o hacer, como en el evento de pago de prestaciones en dinero. Veamos:

(i) Procede la acción constitucional cuando la autoridad que debe cumplir lo ordenado en la sentencia se niega a hacerlo, sin justificación razonable.

(ii) Cuando la omisión o renuencia a cumplir la orden emanada de la decisión judicial quebranta directamente los derechos fundamentales del peticionario, en consideración con las especiales circunstancias en las que se encuentra.

(iii) Cuando el mecanismo ordinario establecido en el ordenamiento jurídico para proteger el derecho fundamental carece de idoneidad, por lo que no resulta efectivo para su protección.

Adicionalmente, tratándose de la procedencia del amparo para definir derechos litigiosos, esta Corporación ha señalado que se debe verificar lo siguiente:

(i) La acreencia laboral solicitada, la edad y el estado de salud del demandante, con el objetivo de establecer si el peticionario se encuentra en condiciones de afrontar un proceso adicional para el reconocimiento prestacional.

(ii) Se debe establecer la situación económica del actor a partir de factores, tales como la composición de su núcleo familiar, las personas que dependan de él y si cuenta con otros medios de subsistencia.

iii) En caso de que se instaure la tutela como mecanismo transitorio, deben evaluarse las pruebas con las que el demandante pretende demostrar el perjuicio irremediable, procedente de la omisión por parte de la autoridad encargada del cumplimiento de la obligación reclamada[3].

(iv) Verificada la convergencia de circunstancias que demuestren la vulnerabilidad del actor, resulta necesaria la intervención del juez de tutela, para proteger, de manera definitiva, los derechos fundamentales vulnerados, pues resulta evidente la latente carencia de idoneidad del medio ordinario para reclamar el cumplimiento de lo ordenado en una decisión judicial[4].” **Es importante traer a colación lo indicado por la Corte Constitucional en sentencia T-628/14 frente a la ACCION DE TUTELA PARA CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS-Alcance/OBLIGACION DE HACER-Cumplimiento**, así: “...Cabe destacar la importancia que reviste para nuestro ordenamiento jurídico el cumplimiento de las decisiones judiciales, toda vez que éstas son proferidas por los jueces de la República, en su condición de administradores de justicia y protectores del ordenamiento jurídico, razón por la cual deben ser acatadas por todos los ciudadanos. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado en varias oportunidades que tanto las autoridades como los particulares deben acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales, pues así se garantiza la efectividad de los derechos fundamentales de quienes acceden a la administración de justicia y al mismo tiempo se manifiesta el Estado Social de Derecho¹. Puede consultarse, entre otras, las sentencias T-537 del 29 de 1994, MP. Antonio Barrera Carbonell, T-553 de 1995, MP. Carlos Gaviria Díaz, T- 809 del 29 de 2000, MP. Fabio Morón Díaz, T-510 de 2002, MP. Marco Gerardo Monroy Cabra y T- 1051 de 2002, MP. Clara Inés Vargas Hernández. ² MP. Carlos Gaviria Díaz. En este orden de ideas, el derecho al acceso a la administración de justicia contemplado en el artículo 228 de la Constitución, debe entenderse no sólo como la posibilidad de acudir ante las autoridades judiciales para plantear un problema, sino que su materialización implica que el problema se resuelva y que se cumpla lo ordenado en la decisión judicial. Así, en Sentencia T-553 de 1995, MP. Carlos Gaviria Díaz, la Corte explicó lo siguiente: “La exactitud y oportunidad en el cumplimiento de los fallos judiciales resulta esencial para garantizar no solamente el cometido de la persona -que se constituye en su derecho fundamental- de acceder materialmente a la administración de justicia sino para

sostener el principio democrático y los valores del Estado de Derecho. A no dudarlo, un signo inequívoco de decadencia institucional y de debilitamiento de la democracia es la pérdida del respeto y acatamiento a las determinaciones de los jueces, encargados de definir el Derecho y de suministrar a la sociedad con arreglo a la Constitución y a las leyes las fórmulas pacíficas de solución de los conflictos que surgen en su seno. La actitud de desacato a las providencias de los jueces, por lo que significa como forma de desestabilización del sistema jurídico debe ser sancionada con severidad. Frente a ella por supuesto, cabe la tutela para proteger los derechos fundamentales que, como consecuencia, puedan resultar afectados. El cumplimiento de las sentencias judiciales es parte integrante de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia pues la circunstancia de una persona a cuyo favor se ha resuelto tiene derecho garantizado por el Estado, a que lo judicialmente ordenado se cumpla con exactitud y oportunidad." Como los fallos judiciales ejecutoriados son de obligatorio cumplimiento y en ellos se reconocen derechos a favor de las personas, la Corte ha reconocido que en los eventos en que se niegue el cumplimiento de dichos pronunciamientos, procede la acción de tutela como mecanismo que garantiza que una sentencia proferida en la jurisdicción ordinaria sea respetada y que los derechos fundamentales derivados de las mismas sean resguardados. Lo anterior se ve reflejado en la Sentencia T-363 de 20053, en la que la Corte Constitucional señaló: "En tal virtud, cuando la autoridad demandada se rehúsa a ejecutar completamente lo dispuesto en una providencia judicial que le fue adversa no sólo vulnera los derechos que a través de esta última se han reconocido a quien invocó protección, sino que desacata una decisión que hizo tránsito a cosa juzgada. Si tales derechos son fundamentales, el desconocimiento de la sentencia que los ampara viola el Ordenamiento Superior, también por esa razón." (...) Sin embargo, la Corte para determinar la procedencia de la tutela y proteger derechos fundamentales vulnerados como consecuencia del incumplimiento de un fallo judicial, distingue el tipo de obligación contenida en el pronunciamiento, concluyendo que esta acción puede utilizarse como mecanismo para que se cumplan las obligaciones de hacer, mas no es admisible frente a las obligaciones de dar, toda vez que para estos asuntos la acción idónea es la ejecutiva. En este sentido, esta Corporación se pronunció en Sentencia T-599 de 2004: "Ahora bien, en lo que hace a la obligación contenida en el fallo incumplido, la jurisprudencia ha distinguido entre una obligación de hacer y una dar, para concluir que el mecanismo de la tutela puede ser instrumento para hacer cumplir las obligaciones de hacer, cuando se interpone en orden a garantizar la ejecución de una sentencia, pero que no es admisible frente a la ejecución de obligaciones de dar, porque para estos casos el instrumento idóneo de carácter ordinario es el proceso ejecutivo. En este sentido, se pronunció la Corte en la Sentencia T-403 de 19965: En lo que hace referencia al cumplimiento de sentencias judiciales por vía de tutela, **esta Corte ha expresado que cuando lo ordenado en la providencia incumplida es una obligación de hacer, es viable lograr su cumplimiento por medio de la acción de tutela, pues los mecanismos consagrados en el ordenamiento jurídico no siempre tienen la idoneidad suficiente para proteger los derechos fundamentales que puedan verse afectados con el incumplimiento de una providencia. En cambio, cuando se trata del cumplimiento de obligaciones de dar, la ley ha previsto un mecanismo idóneo para lograr su cumplimiento, como es el proceso ejecutivo, cuya adecuada utilización garantiza el forzoso cumplimiento de la obligación que se pretende eludir, ya que pueden pedirse medidas cautelares, como el embargo y secuestro de los bienes del deudor y su posterior remate, para asegurar así el pago que se pretende evadir.**"

Ahora bien, la Corte ha reconocido de manera excepcional la procedencia de este mecanismo cuando la obligación del fallo incumplido es de dar, siempre que con el incumplimiento de dicha obligación se afecten otros derechos fundamentales como el mínimo vital, la dignidad humana y la integridad física. Al respecto, en la Sentencia T- 631 del 31 de julio de 2003, se aclaró: "Con todo la Corte ha considerado procedente la acción de tutela en aquellos casos en los **que se ha exigido el cumplimiento de sentencias que reconocen pensiones**, como quiera que si el juez de tutela se abstiene de ordenar la inclusión en nómina de los peticionarios convalida la afectación del mínimo vital de los mismos⁷, lo cual constituye una excepción a la regla según la cual la tutela es improcedente si persigue el cumplimiento de sentencias que generan obligaciones de dar".

En este sentido, es importante traer a colación el precedente fijado por esta Corporación en la Sentencia T-151 de 2007, en la que se estudió el caso de una persona de 79 años de edad, a quien en el año 2005, en virtud de una providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, le fue reconocido su derecho al reajuste pensional, sin que a la fecha de presentación de la acción de amparo, el Departamento del Valle del Cauca hubiera dado cumplimiento a lo ordenado. En esta oportunidad, la Corte amparó los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia y al mínimo vital del actor, pese a que los jueces de instancia consideraron que no estaba suficientemente acreditada la ocurrencia de un perjuicio irremediable y existía la vía ejecutiva para reclamar sus pretensiones. Así, advirtió que las especiales circunstancias de indefensión y vulnerabilidad en las que se encontraba el accionante, resultaba desproporcionado el hecho de exigirle promover un proceso ejecutivo para obtener el pago de su reajuste pensional previamente ordenado por la jurisdicción contenciosa administrativa. Ahora bien, en relación con la solicitud de cumplimiento de una decisión judicial en la que se condena a una entidad pública, resulta pertinente consultar las normas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo⁹ que regulan el tema. De esta manera, el artículo 192 señala que “Cuando la sentencia imponga una condena que no implique el pago o devolución de una cantidad líquida de dinero, la autoridad a quien corresponda su ejecución dentro del término de treinta (30) días contados desde su comunicación, adoptará las medidas necesarias para su cumplimiento. Las condenas impuestas a entidades públicas consistentes en el pago o devolución de una suma de dinero serán cumplidas en un plazo máximo de diez (10) meses, contados a partir de la fecha de la ejecutoria de la sentencia. Para tal efecto, el beneficiario deberá presentar la solicitud de pago correspondiente a la entidad obligada”.

*A su vez, el parágrafo 1º del artículo 195 dispone que “El incumplimiento a las disposiciones relacionadas con el reconocimiento de créditos judicialmente reconocidos y con el cumplimiento de la totalidad de los requisitos acarrearán las sanciones penales, disciplinarias y fiscales a que haya lugar”. De lo anteriormente expuesto, puede concluirse que no obstante ser la acción de tutela un mecanismo residual y subsidiario, es procedente de manera general para hacer cumplir un fallo judicial del que se desprendan obligaciones de hacer y **excepcionalmente cuando de él se derivan obligaciones de dar**, siempre que con su inobservancia se evidencie una clara afectación de derechos fundamentales y los mecanismos judiciales alternativos no sean suficientemente eficaces para la protección de los derechos fundamentales vulnerados”.*

Una vez esbozados los referentes jurisprudenciales de la Corte Constitucional sobre el tema tratado, el Juzgado debe determinar si la tutela fue interpuesta en cumplimiento de los requisitos señalados.

3.- CASO CONCRETO

Del contexto de la solicitud, y de la prueba documental aportada con ella, se establece que la accionante lo que pretende a través de la presente tutela es que alguna de las entidades accionadas emita el Acto Administrativo que le reconozca la pensión de sobreviviente por el fallecimiento de su esposo JAVIER CORREA OSPINA, y la incluya en nómina para su posterior pago, teniendo en cuenta que existe una sentencia del Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali, la cual fue confirmada y modificada por la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali mediante Sentencia No. 049 del 19 de febrero de 2021, decisión judicial que se encuentra ejecutoriada.

Conforme ello, la entidad accionada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES, se limitó a indicar que verificados los sistemas de información que tiene Colpensiones, se puede observar que no se encuentra petición reciente presentada por la accionante ante esta entidad que se encuentre pendiente de respuesta, afirmación que no es congruente con lo afirmado por la actora respecto a la radicación de documentos con número 2024_13127035 de 28 de junio de 2024, y con las respuestas emitidas por la entidad que obran en el expediente de fecha 28 de junio de 2024 y 27 de julio de 2024, que denotan que la entidad si se encuentra en poder de los documentos y solicitud encaminadas al reconocimiento de pensión inicialmente en favor del señor JAVIER CORREA OSPINA, pero que, ante su

fallecimiento el 27 de marzo de 2024 deberá hacerse en su conyugue sobreviviente aquí accionante.

Así mismo, teniendo en cuenta que, en nueva respuesta de 30 de septiembre ante este Juzgado, indicó que, mediante oficio de 27 de septiembre de 2024, la Dirección de Afiliaciones, efectuó los procesos tendientes a restaurar la afiliación del señor JAVIER CORREA OSPINA a favor de Colpensiones, no obstante, a la fecha la Administradora de Pensiones Protección, no ha efectuado el correspondiente traslado de aportes.

Por su parte, el accionado AFP PROTECCION S.A. señala que corresponde a COLPENSIONES acatar la sentencia de segunda instancia donde se ordenó de forma expresa que desde el momento de la ejecutoria, el fondo de pensiones debía pagar de forma completa la pensión de vejez sin perjuicio del trámite administrativo que se deben adelantar entre Protección como AFP, Suramericana como aseguradora en la renta vitalicia y Colpensiones como entidad que debía pagar la pensión de vejez al señor Javier Correa Ospina, hoy, a la señora MARÍA TERESA RIVERA DE CORREA en calidad de conyugue sobreviviente, no obstante, señala que las ordenes impuestas a esa Administradora fueron cumplidas, pues se efectuó el pago de las costas con la constitución del título de depósito judicial, los gastos de administración fueron pagados a Colpensiones, y las primas de seguros previsionales fueron pagados a la aseguradora, conforme a la relación siguiente:

Entidad	Obligaciones según la sentencia
Colpensiones	1. Reconocer y pagar la pensión de vejez a Javier Correa Ospina desde el 28 de junio de 2009, ajustada según el IPC. 2. Pagar la diferencia de lo que se ha cancelado por mesada pensional desde el 18 de septiembre de 2015 hasta la ejecutoria de la providencia. 3. La mesada para el año 2021 se establece en \$2.223.267,05. 4. Descontar los aportes a salud del retroactivo a pagar. 5. No pagar mesadas o diferencias pensionales causadas antes del 18 de septiembre de 2015.
Protección S.A.	1. Devolver los gastos de administración cobrados durante la afiliación de Javier Correa Ospina, así como las primas pagadas por seguros previsionales y el porcentaje cobrado por garantía de pensión mínima, junto con los rendimientos generados. 2. Asumir las costas del proceso, fijadas en \$900.000.
Suramericana	1. Devolver a Colpensiones el capital restante que tiene para financiar la pensión de Javier Correa Ospina. 2. Reintegrar al Ministerio de Hacienda los valores del Bono Pensional Tipo A, actualizados según el IPC. 3. Dejar de pagar la pensión de vejez a Javier Correa Ospina a partir de la ejecutoria de la providencia. 4. Asumir las costas del proceso, fijadas en \$900.000.

Finalmente, la vinculada SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A. manifestó que realizó dos (2) pagos a favor de la AFP PROTECCIÓN S.A., pues al ser esta la administradora de fondos de pensiones del RAIS, recaía en ella la obligación y gestión efectuar la devolución a las entidades administradoras del RPM (Colpensiones y OBP), dichos pagos correspondieron a, (i) \$218.356.496, de la reserva de capital con la que contaba la compañía para efectuar el pago de la pensión de vejez que se encontraba disfrutando el señor CORREA, y (ii) \$149.746.805 por la indexación del bono pensional ordenada en sentencia.

Para resolver el presente caso es importante traer a colación que la Corte Constitucional en sentencia T-048 de 2019, respecto al cumplimiento de fallos judiciales, en los que se involucre el reconocimiento y pago de derechos económicos laborales, indicó:

“Como se refirió en el apartado correspondiente, la Corte ha señalado que tratándose del cumplimiento de providencias judiciales que han reconocido el pago de derechos pensionales, y que corresponden a obligaciones de dar, resulta una obligación de las autoridades administrativas concernidas el acatamiento del fallo y la materialización de los derechos prestacionales a través de la incorporación oportuna y célere en la nómina de quién adquirió la calidad de pensionado. Lo anterior, como quiera que el ciudadano afectado, previamente,

ha acudido ante la jurisdicción ordinaria para resolver una controversia, que le ha sido fallada favorablemente a sus intereses y pretensiones. Por lo que someterlo a una espera adicional cuando su derecho pensional ya ha sido reconocido sería una carga desproporcionada que tendría que asumir. Supra. “El deber y obligación de las autoridades públicas de cumplir oportunamente los fallos judiciales ejecutoriados como garantía de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia. Reiteración de jurisprudencia.”

En el mismo sentido la sentencia T-628/14, se había pronunciado respecto de las obligaciones de dar indicando:

“Ahora bien, la Corte ha reconocido de manera excepcional la procedencia de este mecanismo cuando la obligación del fallo incumplido es de dar, siempre que con el incumplimiento de dicha obligación se afecten otros derechos fundamentales como el mínimo vital, la dignidad humana y la integridad física. Al respecto, en la Sentencia T- 631 del 31 de julio de 200312, se aclaró:

“Con todo la Corte ha considerado procedente la acción de tutela en aquellos casos en los **que se ha exigido el cumplimiento de sentencias que reconocen pensiones**, como quiera que si el juez de tutela se abstiene de ordenar la inclusión en nómina de los peticionarios convalida la afectación del mínimo vital de los mismos, lo cual constituye una excepción a la regla según la cual la tutela es improcedente si persigue el cumplimiento de sentencias que generan obligaciones de dar”.

Conforme lo señalado en la anterior línea jurisprudencial constitucional, en un principio no es de recibo el argumento expuesto por la entidad Colpensiones en su respuesta a la presente tutela y las entregadas el 28 de junio y 27 de julio de 2024 al causante, entendiéndose, entregadas a su conyugue sobreviviente, puesto que después de tres años de estar en firme la sentencia que ordenó a dicha entidad reconocer y pagar la pensión al señor JAVIER CORREA OSPINA, para poder cumplir esa condena laboral, se encuentra aun adelantando una actuación de verificación del contenido de aquellas decisiones judiciales, y en la espera actual del traslado de recursos por parte de otras entidades.

No obstante, encuentra este Juzgado que conforme a la respuesta entregada por SURAMERICANA DE SEGUROS DE VIDA S.A., donde manifiesta haber trasladado a PROTECCION S.A., los rubros por reserva de capital con la que contaba la compañía para efectuar el pago de la pensión de vejez, y por la indexación del bono pensional ordenada en sentencia, existe una carga pendiente por parte del fondo privado consistente en trasladar a COLPENSIONES y al MINISTERIO DE HACIENDA los valores que se encuentran en su poder así:

Deudor

Sociedad

Nombre

Población

300000021

2000

PROTECCION

MEDELLÍN

St	Asignación	N° doc.	Cla	Fecha doc.	I	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<div><div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div></div></div>	08.03.2024	5500370566	04	08.03.2024		218.356.496	COP	1600486017	D22 Directo Cancelac Poliza c vigencia
		8002297390	1600486017	DA	20.03.2024		218.356.496	COP	1600486017	DEVOLUCION SOLICITADA POR MIGUEL FERIA
*	<div><div><div></div><div></div></div></div>						0	COP		
** Cuenta 300000021							0	COP		

Acresedor

Sociedad

Población

1100000008 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRO

2000

MEDELLIN

NIT: 31

St	Asignación	N° doc.	Clase	Texto	Clave ref.i	ImpteML	VF	BP	Fecha doc.	Fecha pago	Compens.	Referencia	ML	Doc.comp.	Soc.	
<div><div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div></div></div>	8002297390	6302230563	12	PAGO COBERTURA POR PROCESO JU-	087020002436	149.746.800	-	T	07.05.2024	07.05.2024	08.05.2024	22660598	COP	2008060361	2000
<div><div><div></div><div></div></div></div>	<div><div><div></div><div></div></div></div>	8002297390	2008060361	2P			149.746.800		T	08.05.2024	08.05.2024	08.05.2024	20240508-RE-	COP	2008060361	2000

De igual manera, y en cuanto a la situación de vulneración de derechos fundamentales, en el caso concreto, se observa de la prueba documental adjuntada con la solicitud de tutela, concerniente a la historia clínica de la solicitante, la circunstancia que alude a una sujeto de especial protección constitucional pues es una adulto mayor con 69 años de edad, en un estado delicado de salud por padecer enfermedades crónicas, y que aduce expresamente el encontrarse en una difícil situación económica, debido a la dependencia material absoluta de la pensiones que

devengaba su esposo las cuales fueron suspendidas desde marzo de 2024, quien con la actual situación económica no puede cubrir sus gastos de subsistencia, por lo que solo cuenta con la obtención del ingreso de la pensión para sobrevivir, situación tampoco desvirtuada por las accionadas; así mismo, aquel estado de vulnerabilidad de la solicitante, determina que resulta desproporcionado exigirle promover un proceso ejecutivo para obtener el pago pensional al que ya tiene derecho conforme a las sentencias dictadas a favor de conyugue.

En consecuencia, acreditado la vulneración de los derechos fundamentales al mínimo vital y la seguridad social de la interesada, frente a la que igualmente se verificó que se trata de una sujeto de especial protección constitucional, sumado a que no ha sido cumplida la sentencia proferida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cali y Tribunal Superior de Cali para el momento en que se profiere esta sentencia, según se puede concluir de la respuesta dada por la entidad aquí accionada, la cual según lo previsto en el Art. 305 del C.G.P., su ejecución debía cumplirse inmediatamente cobrara ejecutoria la providencia de segundo grado de fecha 19 de febrero de 2021, impone impartir un mecanismo de protección de amparo alusivo a compeler primeramente a PROTECCION S.A., para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, traslade a COLPENSIONES y al MINISTERIO DE HACIENDA, los dineros que por concepto de reserva de capital e indexación del bono pensional fueron puestos a su disposición por SURAMERICANA SEGUROS DE VIDA S.A., y respecto de COLPENSIONES, se ordena que emita en un plazo razonable de 15 días, posteriores al lleno de los requisitos por parte de la señora MARÍA TERESA RIVERA DE CORREA, el acto administrativo que resuelva sobre la solicitud de pensión de sobreviviente a la accionante.

En mérito de lo expuesto, el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE CALI administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONCEDER la protección constitucional al derecho fundamental al MINIMO VITAL, A LA PENSION, A LA SALUD Y A UNA VIDA DIGNA de la señora MARIA TERESA RIVERA DE CORREA, teniendo en cuenta las razones expuestas en el cuerpo de esta providencia.

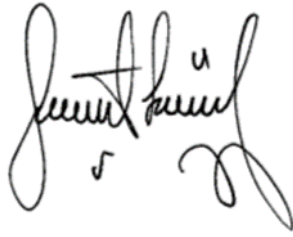
SEGUNDO: ORDENAR a PROTECCION S.A., para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación del presente fallo, traslade a COLPENSIONES y al MINISTERIO DE HACIENDA, los dineros que por concepto de reserva de capital e indexación del bono pensional fueron puestos a su disposición por parte de SURAMERICANA SEGUROS DE VIDA S.A.

TERCERO: ORDENAR a COLPENSIONES que dentro del término razonable de quince (15) días posteriores al lleno de los requisitos por parte de la señora MARÍA TERESA RIVERA DE CORREA, emita acto administrativo que resuelva sobre la solicitud de pensión de sobreviviente a la accionante.

CUARTO: Notifíquese la presente providencia a las partes conforme lo establece el artículo 30 del Decreto 2591 de 1.991.

QUINTO: Si no fuere impugnada la presente decisión remítanse las presentes diligencias a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Víctor Hugo Sánchez Figueroa', with a stylized flourish at the end.

VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ FIGUEROA
Juez